

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 2757-2009**

**LIMA**

Lima, siete de julio de dos mil diez.

**VISTOS;** los recursos de nulidad

interpuestos por el encausado Juan Roberto Sacsi Inga y la Procuradora Pública, contra la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil ocho, de fojas treinta y dos mil ciento cuarenta y tres; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Neyra Flores; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal.

**CONSIDERANDO: Primero:** Que el encausado recurrente en su recurso de fojas treinta y dos mil doscientos ocho, impugna el extremo de la sentencia que le impone nueve años de pena privativa de la libertad pues considera que no se ha tenido en cuenta las carencias socio económicas y culturales que lo llevaron a cometer el hecho delictivo, por tanto solicita que se le rebaje a cinco años de pena privativa de libertad. Por su parte la Procuradora Pública, en su recurso obrante en copia certificada de fojas cincuenta -del cuadernillo formado en esta instancia Suprema- impugna el extremo de la sentencia que fija el monto de reparación civil ascendente a seis mil ciento ochenta nuevos soles, pues considera que es insuficiente y no cubre los daños y perjuicios generados al titular de los bienes afectados. Considera que la reparación civil no sólo debe comprender la reparación del daño, sino también una indemnización justa y equitativa acorde con los daños y perjuicios irrogados al Estado; asimismo debe considerarse que la conducta violenta, cruel e intimidatoria del encausado generó un estado de zozobra y temor en la población, así como la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 2757-2009**

**LIMA**

huida de inversiones privadas en la región y en el país, toda vez que con este acto reflejaba una inseguridad social y jurídica. Razones por las cuales considera que el monto debe ser incrementado a una cantidad no menor de un millón de nuevos soles. **Segundo:** Que, conforme se desprende de la acusación fiscal de fojas veintiocho mil doscientos setenta y seis se imputa al encausado Juan Roberto Sacsi Inga haber ingresado de manera violenta, vestido con uniforme y pertrechos militares junto con sus co procesados y sentenciados a la comisaría de Andahuaylas, el día uno de enero de dos mil cinco, acción dirigida por Amaura Igor Humala Tasso y Marco Antonio Vizcarra Alegría, además de haber sustraído junto a su co procesados y sentenciados las armas de la citada dependencia y tomar como rehenes a los efectivos policiales que se encontraban -unos de servicio y otros descansando- en el interior de la citada dependencia policial con la finalidad de deponer al gobierno legalmente constituido; asimismo, entre los días uno, dos y tres de enero de dos mil cinco, a llevarse a cabo la toma de la comisaría sectorial de Andahuaylas ocasionaron destrucciones e inutilizaron bienes muebles e inmuebles de propiedad de la citada delegación consistentes en enseres, archivos, vehículos patrulleros, originando con su acción una situación de grave alarma social. **Tercero:** Que, de acuerdo al artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve, esta Suprema Sala deberá emitir pronunciamiento únicamente en los extremos materia de impugnación, circunscribiéndose en el presente caso a la pena impuesta y al monto de reparación civil fijada en la sentencia contra

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 2757-2009**

**LIMA**

el encausado Juan Roberto Sacs Inga. **Cuarto:** Que, es importante precisar que la determinación de la pena no es más que una teoría sobre los factores relacionados con el injusto y la culpabilidad que configuran el significado comunicativo del hecho concreto (FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo. Individualización de la pena y teoría de la pena proporcional al hecho. En: Indret. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona. Enero, dos mil siete, página nueve). En ese sentido, dicha teoría debe realizarse conforme a los fines de la misma, siendo importante resaltar la teoría de la prevención general positiva, lo que implica asumir como criterio de determinación de la pena al hecho delictivo; es decir, el quantum de la pena impuesta debe ser proporcional al hecho delictivo realizado (a efectos de modular o asumir una pena hacia arriba o hacia abajo, dicho razonamiento tiene que realizarse conforme al injusto y la culpabilidad del encausado, es decir de acuerdo a una concepción material del delito). **Quinto:** Que, asimismo debe tenerse en cuenta que las exigencias que determinan su aplicación no se agotan con el principio de culpabilidad sino que además debe valorarse el principio de proporcionalidad y humanidad de las penas, para cuyo fin se debe tener en consideración lo dispuesto por los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, procurando la correspondencia entre el injusto cometido y la pena a imponerse, por lo que está permitido en nuestro ordenamiento penal que frente a determinadas circunstancias se pueda rebajar la pena, aún por debajo del mínimo legal, y que ésta en el fondo cumple sus fines - preventiva, protectora y resocializadora-, conforme prevé el numeral veintidós del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado y el artículo IX del Título Preliminar del Código

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 2757-2009**

**LIMA**

Penal. **Sexto:** Que, de la evaluación de los actuados se advierte que el Colegiado Superior efectuó de fijar la pena al encausado Juan Roberto Sacsí Inga ha realizado un análisis adecuado -véase sección III de la sentencia recurrida de fojas treinta y dos mil ciento cincuenta y uno-, tomando en cuenta los criterios de determinación de la pena previstos en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal y los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del citado Código punitivo; atendiendo además a las penas conminadas previstas para los delitos de secuestro (inciso tres del artículo ciento cincuenta y dos del Código Penal modificado por la Ley número veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos, cuya pena conminada es de veinte a veinticinco años de pena privativa de libertad) y rebelión (artículo trescientos cuarenta y seis del citado texto legal, cuya pena fijada es de diez a veinte años de pena privativa de libertad), sustracción y arrebato de arma de fuego (artículo doscientos setenta y nueve B, cuyo marco punitivo es entre diez y veinte años de pena privativa de libertad) y daño agravado (inciso tres del artículo doscientos seis del precitado Código, que prescribe pena privativa de libertad de uno a seis años), materia de juzgamiento así como al grado de coparticipación en los hechos incriminados; asimismo a la aceptación de los cargos al inicio del juicio oral conforme se advierte de la sesión de audiencia de fecha trece de noviembre de dos mil ocho, de fojas treinta y dos mil ciento sesenta y tres. Este Supremo Tribunal considera que la pena a imponerse debió ser mayor tomando como base la pena del delito más grave, que en este caso es el delito de secuestro, el mismo que tiene una pena conminada de veinte a veinticinco años de pena privativa de libertad; empero, estando a que el representante del Ministerio Público mostró su conformidad en la lectura de sentencia -véase fojas treinta y dos mil ciento sesenta y nueve- no es posible elevar la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 2757-2009

LIMA

pena fijada por el Colegiado Superior. **Séptimo:** Que, en cuanto a la reparación civil debemos señalar que el monto fijado ascendente a seis mil ciento ochenta nuevos soles se encuentra acorde con los parámetros establecidos en los artículos noventa y dos, noventa y tres y noventa y cinco del Código Penal, pues ha sido fijado atendiendo tanto al daño causado, a la situación personal y laboral del encausado, así como a las circunstancias que rodearon al hecho, siendo el monto fijado una cantidad prudencial. En consecuencia no debe sufrir variación alguna. Por estos fundamentos declararon **NO HABER NULIDAD** en la sentencia de fojas treinta y dos mil ciento cuarenta y tres, de fecha trece de noviembre de dos mil ocho, y los extremos que impuso a Juan Roberto Yacsi Inga nueve años de pena privativa de libertad, y fijó en la suma de seis mil ciento ochenta nuevos soles el monto por concepto de reparación civil que deberá abonar en forma solidaria a favor del Estado, conjuntamente con los demás sentenciados; en el proceso que se le sigue como coautor de los delitos contra la Libertad Personal -secuestro- en agravio de Miguel Ángel Canga Guzmán -Mayor PNP-, Jorge Martín Martínez Ramos y Enrique Apaza Machuca -Capitanes PNP-, Larry Cesáreo Fernández Purisaca -Teniente PNP-, Máximo Justino Mauricio Diestra, Aníbal Gómez Ligarda, Plácido Palomino Lazo, Gregorio Rodríguez Chasafana, Gregorio Cruz Gutiérrez, Jorge Chacón Luna, Rolando Escobar Estrada, Rolando Espinoza Villalobos, Simón Tristán Villalobos, Efraín Alfredo Arredondo Jaja, Martín Alvarado Rojas, Ubaldino Rojas Porroa, José Efraín Berrocal Cartolín, Hermógenes Durán Castillo y Edgar Yacavilca Centeno -Sub Oficiales PNP-, Carlo Rivera Chirinos y Percy Iván Rojas

6x

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
**SALA PENAL TRANSITORIA**  
**R. N. N° 2757-2009**

**LIMA**

Espinoza -Capitanes de Infantería del Ejército Peruano-, Ramón Preciado Loayza -Teniente del Ejército Peruano- y Freddy Max Juárez Palomino -Sub Oficial Ejército Peruano- Contra la Seguridad Pública -sustracción o arrebató de armas de fuego- en agravio del Estado; contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional -rebelión- en agravio del Estado, y contra el Patrimonio -daño calificado- en agravio del Estado; **DISPUSIERON** que la Sala Superior imparta las órdenes de ubicación y captura contra el precitado a fin de dar cumplimiento al presente fallo supremo, debiendo tener presente en su oportunidad, el tiempo de carcelería sufrida, para su descuento en el cómputo respectivo con lo demás que contiene y los devolvieron.-  
S.S.

RODRÍGUEZ TINEO

BIAGGI GÓMEZ

BARRIOS ALVARADO

BARANDIARÁN DEMPWOLF

NEYRA FLORES

NF/jstr

**SE PUBLICO CONFORME A LEY**

**INGENIERO SOTELO TASAYCO**  
SECRETARIO (a)  
Sala Penal Transitoria  
CORTE SUPREMA